

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**



Medellín, veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

**Demandantes:** Ana Lucía Montoya de Ardila

**Demandada:** Colpensiones

**Radicado:** 05 001 31 05 007 2017 00184 01

**AUTO**

Para representar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se le reconoce personería a la doctora Adriana Velosa Pérez identificada con cédula de ciudadanía 1.047.441.934 y tarjeta profesional 264.806 del Consejo Superior de la Judicatura, en virtud de la sustitución de poder que le confiere la doctora Maricel Londoño Ricardo.

**SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001 31 05 007 2017 00184 00 promovido por la señora **ANA LUCÍA MONTOYA DE ARDILA** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandante frente a la sentencia emitida el 12 de julio de 2017 por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de emergencia, económica, social y ecológica”, se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **074**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

### **ANTECEDENTES**

La señora Ana Lucía Montoya de Ardila, demandó a Colpensiones pretendiendo el reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su cónyuge Conrado de Jesús Ardila Correa a partir del 21 de octubre de 2012, intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, indexación y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones expuso, que contrajo matrimonio católico con el señor Conrado de Jesús Ardila Correa el 4 de febrero de 1977. De dicha unión procrearon a Lina María y Duber Andrés Ardila Montoya, mayores de edad. Su cónyuge falleció el 21 de octubre de 2012. El 5 de agosto de 2013 solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, y la entidad se la negó mediante la Resolución GNR de 2014, aduciendo que el afiliado no cotizó 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a su fallecimiento conforme lo exige el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y en su lugar le otorgó la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes en cuantía de \$7.497.643.00. Aduce que el causante cotizó más de 300 semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y por tanto tiene derecho a que se le aplique el principio de la condición más beneficiosa.

En sentencia proferida el 12 de julio de 2017, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín absolvió a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones de las pretensiones formuladas en la demanda, y condenó en costas a la accionante.

## **RECURSO DE APELACIÓN**

El apoderado de la demandante considera que a su representada le asiste derecho a la pensión de sobrevivientes al amparo del Decreto 758 de 1990 en virtud del principio de la condición más beneficiosa toda vez que el señor Conrado de Jesús Ardila Correa tenía cotizadas al 1° de abril de 1994 más de 300 semanas, no obstante haber fallecido en vigencia de la Ley 797 de 2003, pues el Decreto aludido resulta ser la norma más favorable conforme lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU - 442 de 2016, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias de 25 de julio de 2012, Radicado 38.674 y de 12 de marzo de 2014, Radicado 44.524 y el Tribunal Superior de Medellín dentro del proceso con radicado 05001310502020140014401 de 9 de marzo de 2017 con ponencia del Magistrado Carlos Alberto Lebrum Morales.

## **ALEGATOS DE CONCLUSION**

La apoderada de Colpensiones presentó dentro del término legal escrito de alegatos de conclusión solicitando se confirme la sentencia absolutoria de primera instancia.

## **PROBLEMA JURÍDICO**

El problema jurídico, de esta segunda instancia, consiste en determinar si a la actora le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su cónyuge Conrado de Jesús Ardila Correa, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, en el tránsito legislativo entre el Decreto 758 de 1990 y la Ley 797 de 2003 y su consecuente retroactivo pensional, intereses moratorios e indexación.

## **CONSIDERACIONES**

Examinada en conjunto la prueba documental que reposa de folios 8 a 20 y 54 a 56 del expediente, la Sala encuentra:

- i) Que los señores Ana Lucia Montoya de Ardila y Conrado de Jesús Ardila Correa contrajeron matrimonio católico el 4 de febrero de 1977.
- ii) Que el señor Conrado de Jesús Ardila Correa falleció el 21 de octubre de 2012.
- iii) Que la actora le reclamó administrativamente a Colpensiones el 5 de agosto de 2013, la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su cónyuge Conrado de Jesús Ardila Correa.
- iv) Que Colpensiones negó la prestación económica por medio de la Resolución GNR 14578 de 16 de enero de 2014, aduciendo que el asegurado no cotizó 50 semanas que exige el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento, y concedió la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes en cuantía de \$7.497.643.00.
- v) Que el señor Conrado de Jesús Ardila Correa se afilió al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, el 1° de agosto de 1969, y cotizó en dicha entidad desde esta fecha hasta el 9 de noviembre de 1996, un total de 908.87 semanas.

### **DEL DERECHO PENSIONAL**

De conformidad al documento que reposa a folios 11 del expediente se tiene que el señor Conrado de Jesús Ardila Correa falleció el 21 de octubre de 2012, por ende, las normas aplicables al caso concreto son las contenidas en los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, en razón que, por regla general, y salvo ciertas excepciones, el régimen jurídico aplicable para el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes es el vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado.

El artículo 12 preceptúa que tienen derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del afiliado que fallece, siempre y cuando éste

hubiese cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los tres (3) últimos años inmediatamente anteriores a su fallecimiento.

Según el artículo 13, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite que a la fecha de fallecimiento del causante tenga 30 años o más de edad, siempre y cuando acredite que estuvo haciendo vida marital con el fallecido hasta la fecha de su muerte y convivió con él no menos de cinco años continuos con anterioridad a su deceso, y de manera temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite que a la misma fecha tenga menos de 30 años de edad y no haya procreado hijos con éste.

Sin embargo, en este evento no se colma el presupuesto de la densidad de semanas aludido, porque la historia laboral que reposa de folios 54 a 56 del expediente informa que el asegurado Conrado de Jesús Ardila Correa, cotizó al sistema de pensiones, entre el 1° de agosto de 1969 y el 9 de noviembre de 1996, un total de 908.87 semanas, de las cuales cero (0) semanas corresponden a los últimos tres años anteriores a su fallecimiento.

En consideración a que las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 no consagró un régimen de transición frente a la pensión de sobrevivientes, la Corte Constitucional ha adoctrinado que el principio de favorabilidad consagrado en los artículos 53 Superior y 21 del Código Sustantivo del trabajo, “obedece a uno de los dispositivos que la Carta Política establece para la resolución de conflictos surgidos con ocasión de la interpretación o aplicación de las normas que regulan relaciones del trabajo”; y opera, no sólo cuando se presenta un conflicto entre normas sino también cuando existe una norma que admite varias interpretaciones (Sentencias T-792 de 2010 y T-350 de 2012 y T-084 de 2017).

La Corporación mencionada ha señalado en diversas oportunidades que cuando se analiza sobre la procedencia de la pensión de sobrevivientes se puede examinar el reconocimiento de esta prestación a la luz de una norma jurídica anterior a la vigente en el momento de causarse el derecho, aplicando el principio de la condición más beneficiosa como una expresión del principio de favorabilidad, y

que para tal reconocimiento es necesario demostrar que el afiliado cumplió el número de cotizaciones exigidas por dicha norma jurídica, y que los aportes se efectuaron durante su vigencia (Sentencia SU 442 de 18 de agosto de 2016).

El alto Tribunal ha justificado así la aplicación del principio de favorabilidad:

“En efecto, la Corte Constitucional determinó... que en virtud de la inexistencia de un régimen de transición y de los principios de buena fe, confianza legítima y favorabilidad, es posible dar aplicación a una norma anterior... si el afiliado realizó sus cotizaciones en vigencia de la mencionada norma jurídica, cuando una norma posterior resulte desfavorable a su derecho a acceder a la pensión.

Para la Corte Constitucional resulta claro que esta regla tiene como finalidad proteger el principio de favorabilidad que en materia laboral ha reconocido el constituyente primario en el artículo 53 de la Constitución Política. A su vez, el mismo garantiza la protección de la expectativa legítima de aquellos ciudadanos que, observando el régimen pensional vigente para la fecha de su afiliación al sistema de seguridad social, efectuaron sus cotizaciones con el objetivo de obtener su pensión, o el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a sus familiares. Asimismo, es de importancia resaltar que el acceso a la pensión de sobreviviente resulta necesario para la protección del derecho fundamental al mínimo vital, especialmente en aquellos casos en que se evidencia una dependencia económica del cónyuge o compañero permanente supérstite, con el afiliado fallecido. De esta manera, la aplicación del principio de favorabilidad en materia pensional, y en especial, de la condición más beneficiosa, se encuentra directamente ligado a la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos y a la garantía de una vida en condiciones dignas.” (Sentencia T-464 de 2016)

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por su parte, respecto a la aplicación del principio de condición más beneficiosa en el transito legislativo entre el Decreto 758 de 1990 y la Ley 797 de 2003, que es lo pretendido por la parte demandante en este juicio, ha precisado que tal principio opera únicamente en relación con la norma inmediatamente anterior a aquella que regula el caso particular, por lo cual, en los casos en los que el deceso ocurre en vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, la única posibilidad válida de

acudir a una norma anterior remitiría, al texto original del artículo 46 de la ley 100 de 1993, no resultando admisible el estudio del derecho pensional a la luz del decreto 758 de 1990 (Sentencias SL 1673 de 2020, SL 379 de 2020, SL 1938 de 2020 citadas en la Sentencia SL 290 de 9 de febrero de 2021, Radicado 87.064).

La alta Corporación en mención en la sentencia SL 4650 de 2017 fijó la nueva doctrina sobre la aplicación de este principio en el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, definiendo los supuestos en que debe reconocerse la prestación y explica cómo opera tal principio en determinadas situaciones, lo cual se reiteró en las sentencias SL 2358 de 2018, SL 1341 de 2019, SL 1938 de 2020 y SL 290 de 2021, entre otras.

Acorde con la línea jurisprudencial de dicha Corporación, para causarse la pensión de sobrevivientes el causante debía acreditar el cumplimiento de 26 semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior a la entrada en vigor de la Ley 797 de 2003, esto es, entre el 29 de enero de 2002 y el 29 de enero de 2003, supuesto que no se cumple en este caso, en tanto para tal periodo no efectuó aportes al sistema general de pensiones.

Ha de considerarse que al no ser cotizante activo el causante en este caso, para el momento en que operó el tránsito legislativo entre la ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, su caso se ubicó en la hipótesis **3.2** de la sentencia SL 4650 de 2017, esto es, **“Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo”**, evento en el cual sería procedente la pensión de sobrevivientes si el afiliado había aportado 26 o más semanas en el año inmediatamente anterior, esto es, entre el 29 de enero de 2002 y el 29 de enero de 2003, periodo en el que como se indicó no efectuó cotizaciones a pensiones.

El anterior requisito también se exigió en la sentencia SL 2358 de 2017 al estudiarse los supuestos para conceder la pensión de invalidez en desarrollo del principio de la condición más beneficiosa, donde se indicó que “...si el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, no estaba cotizando al sistema y tampoco había aportado 26 o más semanas en el año inmediatamente

anterior, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2002, no posee una situación jurídica concreta...”.

Aunado a ello, al aplicar el precedente al caso de la demandante, es claro que, al haberse producido el deceso el 21 de octubre de 2012, es decir, con posterioridad al 29 de enero de 2006, fecha hasta la cual “es posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima” (SL 4650 de 2017), no le asiste el derecho a la aplicación de la condición más beneficiosa por el tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y la 797 de 2003, pues conforme a los nuevos parámetros establecidos por la Corte, el causante no alcanzó a satisfacer las exigencias para que la demandante pudiese acceder a la pensión de sobrevivientes, bajo la figura de la condición más beneficiosa, en tanto la fecha de su muerte imposibilita la aplicación de los criterios demarcados en dicho precedente.

Bajo el contexto anterior, se reitera que, a luz de la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no tiene cabida, por la imposibilidad de establecer un tránsito normativo entre el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año y la Ley 797 de 2003, lo que en definitiva no permite la utilización del referido principio.

La Tesis antes expuesta, encuentra respaldo en la Corte Constitucional en sentencia SU-005 de 2018, al considerar que la reforma pensional es desproporcionada y contraria a los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas cuando quien pretende acceder a la pensión de sobrevivientes es una persona vulnerable, fijándose en tal proveído las condiciones necesarias a satisfacer para establecer el estado de vulnerabilidad, siempre y cuando los aportes del afiliado se hubiesen efectuado bajo el régimen del decreto 758 de 1990, situación que se presenta en el este caso, en tanto el asegurado fallecido cotizó 774 semanas con anterioridad al 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

El Alto Tribunal en la sentencia indicada, ajustó su jurisprudencia en cuanto al alcance del principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de



sobrevivientes para aplicar de manera ultractiva las disposiciones del acuerdo 049 de 1990 o de un régimen anterior respecto del requisito de las semanas de cotización, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de un afiliado que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, y precisó que se debe cumplir con las siguientes condiciones, cada una necesaria y en conjunto suficientes, del siguiente test de procedencia:

“... **(i)** Debe establecerse que el accionante pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento. **(ii)** Debe establecerse que la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que solicita el accionante afecta directamente la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas. **(iii)** Debe establecerse que el accionante dependía económicamente del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al tutelante - beneficiario. **(iv)** Debe establecerse que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes. Finalmente, **(v)** debe establecerse que el accionante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes...”

“...Con relación a la primera exigencia del *Test de Procedencia*, si bien la pertenencia del accionante a un grupo de especial protección constitucional es una circunstancia jurídicamente relevante, no es la única que permite explicar la totalidad de situaciones de riesgo o de vulnerabilidad en que se encuentran las personas, para efectos de valorar la eficacia en concreto de los medios judiciales principales a su disposición, para la garantía de sus derechos. Por tal razón, otros factores tales como el analfabetismo, la avanzada edad, discapacidad física o mental, de pobreza, o relativas a la condición de cabeza de familia o de desplazamiento pueden ser relevantes, en cada caso, para valorar el carácter subsidiario de la acción de tutela.

La segunda condición del *Test de Procedencia* pretende valorar la relevancia *prima facie* del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes como medio idóneo para la satisfacción de las necesidades básicas del tutelante, de tal forma que pueda establecerse un vínculo con la garantía de sus derechos al mínimo vital y, en consecuencia, a una vida en condiciones dignas. *Contrario sensu* supone verificar si el tutelante, por sí mismo o con la ayuda de su entorno, es incapaz de satisfacer sus necesidades básicas. Este análisis le permite al juez determinar el grado de *autonomía* o *dependencia* para la satisfacción de aquellas y con qué nivel de *seguridad*, en el tiempo, lo puede hacer y, en consecuencia, la eficacia en concreto del medio judicial principal a disposición del tutelante para la garantía de sus derechos. La acreditación de esta condición hace efectivo el mandato que tiene el Estado de ofrecer auxilio a la persona cuando no puede ayudarse a sí misma.

La acreditación de la tercera exigencia del *Test de Procedencia* tiene una estrecha relación con la anterior. Sin embargo, a diferencia de aquella se trata de establecer si el posible reconocimiento de la pensión de sobrevivientes puede cumplir su objeto, esto es, sustituir el ingreso cierto que aportaba el causante al tutelante-beneficiario, de tal forma que pudiera garantizarle la satisfacción de sus necesidades básicas, mediante la plausible protección de su mínimo vital, tal como lo ha considerado la jurisprudencia constitucional. La Sala Plena, en la Sentencia C-617 de 2001, al analizar la exequibilidad del apartado final del literal b) del numeral 2) del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, que regula los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes, señaló que esta prestación tenía por finalidad “*proteger a la familia del trabajador de las contingencias generadas por su muerte*”, lo que impedía que, “*ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento*”. Su reconocimiento pretende, tal como de manera reciente se ha considerado en sede de revisión, disminuir las contingencias económicas derivadas de la muerte de la persona pensionada por vejez o invalidez o del afiliado al sistema, de tal forma que aquellas personas respecto de las cuales lo unían lazos de dependencia puedan satisfacer su mínimo vital, en claro desarrollo de los principios de solidaridad y universalidad que rigen el servicio público a la seguridad social, conforme se deriva del artículo 48 de la Constitución.

La cuarta exigencia del *Test de Procedencia* pretende reconocer el valor de la autonomía para la garantía de los derechos y no una pretensión de dependencia

para tal fin. En consecuencia, le corresponde al juez constitucional determinar que el causante no se marginó voluntariamente del cumplimiento de sus deberes para con el Sistema General de Pensiones, sino que la falta de cotización del número de semanas mínimas, en vigencia de la nueva normativa (respecto de la cual señala no cumplir las exigencias del caso) fue consecuencia de una situación de imposibilidad y no de una decisión propia de incumplimiento. Por tanto, debe acreditarse, así sea sumariamente, la pretensión del afiliado de aportar al sistema y, a su vez, su imposibilidad (a pesar de su esfuerzo concreto) de completar el número de semanas de cotización que exige la normativa vigente.

La quinta exigencia del *Test de Procedencia* deviene del deber de satisfacción propia de las necesidades por parte del individuo, que, en el plano de la exigencia de este tipo de derechos suponen una actuación mínima, en sede administrativa y/o judicial, para efectos de su reconocimiento. Esta, en los términos de la jurisprudencia constitucional, puede considerarse una *precondición* para el ejercicio de la acción de tutela, pues solo procede ante la existencia de una conducta respecto de la cual se pueda efectuar el juicio de vulnerabilidad de derechos fundamentales...”

A juicio de la Corporación Constitucional:

“...En la actualidad, el mecanismo judicial principal e idóneo para la garantía de los derechos que ampara el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes es el proceso ordinario laboral, que regula el Capítulo XIV del Decreto Ley 2158 de 1948, Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Es, además, *prima facie*, y de manera abstracta, un mecanismo *eficaz*, pues, no solo la normativa que lo regula contiene un procedimiento expedito para su resolución, sino que, en el marco del proceso ordinario es posible exigir del juez el cumplimiento del deber que le impone el artículo 48 del CPTSS, según el cual, le corresponde asumir “la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite...”

“...Ahora bien, puesto que en este tipo de asuntos formalmente existe otro medio o recurso de defensa judicial, para efectos de la garantía de los derechos constitucionales fundamentales, de conformidad con las disposiciones previamente

citadas, es necesario determinar su eficacia, *“atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”*. Para efectos de valorar la eficacia en concreto de aquel mecanismo, la Sala Plena unifica su jurisprudencia en aquellos asuntos en los que el problema jurídico sustancial del caso sea relativo al estudio del principio de la condición más beneficiosa, para efectos del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. En estos supuestos, la satisfacción del requisito de subsidiariedad le impone al juez constitucional verificar la acreditación de 5 condiciones, cada una necesaria y en conjunto suficientes, del Test de Procedencia...”.

Siendo así, procederá la Sala a analizar si en el presente caso logra superarse el cumplimiento de las condiciones establecidas en la sentencia SU-005 de 2018 por parte de la accionante para acceder a la pensión de sobrevivientes en aplicación del principio de condición más beneficiosa.

Sea lo primero indicar que en la audiencia de trámite y juzgamiento celebrada el 12 de julio de 2017, en el interrogatorio de parte absuelto por la señora Ana Lucia Montoya de Ardila, adujo que para dicha data contaba con 62 años de edad, que era ama de casa, que el señor Conrado de Jesús Ardila Correa laboró en una ladrillera hasta 1996, y cuando se le preguntó ¿cuál es la razón de que el señor Conrado no continuara trabajando desde 1996?, respondió: *“...él empezó a enfermarse porque él tomaba mucho, entonces ya en ese momento siguió enfermo hasta que falleció. P/ ¿Desde 1996 hasta el 21 de octubre de 2012 cómo se financiaban los gastos al interior del hogar? R/ Yo trabajaba en casas de familia para poder sostener los niños que tenía. P/ ¿Durante ese tiempo el señor Conrado aportaba algo económico al hogar? R/ No, económico no, él empezó muy enfermo entonces él ya no trabajaba. Yo era la que llevaba los gastos de la familia...”*, adujo que su cónyuge no trabajó durante 16 años, pues se mantenía con los amigos tomando y que padecía cirrosis.

Realizado el análisis de los medios probatorios acercados al proceso, que se enmarca dentro de las facultades que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social le confiere al Juzgador la facultad “de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad

real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo.” (Sentencia de 14 de agosto de 2012, Radicado 39.518), considera la Sala que no se acreditan tres de las cinco condiciones establecidas en el test de procedencia, así:

Condiciones	Análisis en el caso concreto	Cumple / No cumple
Pertenecer a un grupo de especial protección constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo	La señora Ana Lucia Montoya de Ardila nació el 23 de enero de 1955, en la actualidad cuenta con 66 años de edad, por lo que pertenece a un grupo de especial protección constitucional en razón de su avanzada edad.	Cumple el requisito del test de procedencia
Afectación directa de la satisfacción de necesidades básicas, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas por la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes	La demandante afirmó que desde 1996 hasta el 21 de octubre de 2012, trabajó en casas de familia para sostener los gastos del hogar.	No cumple el requisito del test de procedencia
Dependencia económica del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso.	La actora manifestó que su cónyuge sólo trabajó hasta 1996, y que era ella quien laboraba para llevar los gastos de la familia.	No cumple el requisito del test de procedencia
Circunstancias de imposibilidad de cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones del causante	<p>La Corte Constitucional precisó que este requisito fue creado mediante la sentencia SU 005 de 2018, por ello, en seis (6) de los siete (7) expedientes que fueron objeto de revisión, infirió la existencia de tal requisito de las condiciones de edad y pobreza del causante al momento de su muerte.</p> <p>En este juicio, se acreditó que el afiliado Conrado de Jesús Ardila Correa para la fecha de su fallecimiento contaba con 57 años de edad, no trabajaba y dependía económicamente de su cónyuge.</p> <p>Por lo que no se acreditó las circunstancias de imposibilidad de</p>	No cumple el requisito del test de procedencia

	realizar aportes al sistema de pensiones en los últimos 3 años anteriores a su muerte.	
El demandante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes	La señora Ana Lucia Montoya de Ardila adelantó la reclamación administrativa ante Colpensiones, para luego promover el proceso ordinario.	Cumple el requisito del test de procedencia

El análisis precedente permite concluir a la Sala, que no le asiste derecho a la accionante a la pensión de sobrevivientes reclamada, pues con lo dicho en su interrogatorio de parte no se acreditan las condiciones segunda, tercera y cuarta del test de procedencia, en tanto la finalidad procesal de dicha prueba es provocar confesión, y de la diligencia del interrogatorio de parte, no puede extraerse válidamente alguna confesión que la favorezca a sí misma, dado que por definición esta debe versar sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria, tal como y lo ha indicado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL 816 de 19 de noviembre de 2013, Radicado 44.701 y SL 8002 de 18 de junio de 2014, Radicado 38.381.

No se hace posible para el juzgador hacer un análisis de la sentencia SU - 442 de 2016, referida por el apoderado apelante en su recurso, de forma aislada de las disposiciones de la antes citada SU - 005 de 2018.

Dado lo anterior, al no acreditarse la procedencia de la aplicación del principio de condición más beneficiosa, con búsqueda histórica de norma más favorable (llamada salto normativo), conforme a las reglas dispuestas por la Honorable Corte Constitucional se confirmará la providencia en este aspecto, por las razones expuestas.

Así las cosas, se confirmará la decisión que se revisa en apelación.

Las costas en ambas instancias corren en favor de Colpensiones y a cargo de la señora Ana Lucia Montoya de Ardila.

En esta instancia se fijan las agencias en derecho, en la suma de \$908.526,00.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

**PRIMERO:** Confirmar la providencia de primera instancia que se revisa en apelación por las razones expuestas.

**SEGUNDO:** Las costas en ambas instancias corren en favor de Colpensiones y a cargo de la señora Ana Lucia Montoya de Ardila.

En esta instancia se fijan las agencias en derecho, en la suma de \$908.526,00.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA  
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados  
N ° 88 de Mayo 24 de 2021

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

**Firmado Por:**

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA  
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ**  
**MAGISTRADO**  
**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA**  
**CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**FRANCISCO ARANGO TORRES**  
**MAGISTRADO**  
**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA**  
**CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez  
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario  
2364/12

Código de verificación:  
**60b868db508df421e833a884d642643f889c45f9bd165a6ec883743336a90935**  
Documento generado en 21/05/2021 11:37:47 AM